

# LA INVERSIÓN EXTRANJERA NECESITA PAZ

## Entrevista con Javier Giraldo

Entrevista realizada por Lola Matamala en Madrid, España.  
Rebelión 27.11.2012 [www.rebelion.org](http://www.rebelion.org)

**Lola Matamala:** ¿Cómo está viviendo la sociedad colombiana este nuevo proceso de paz?

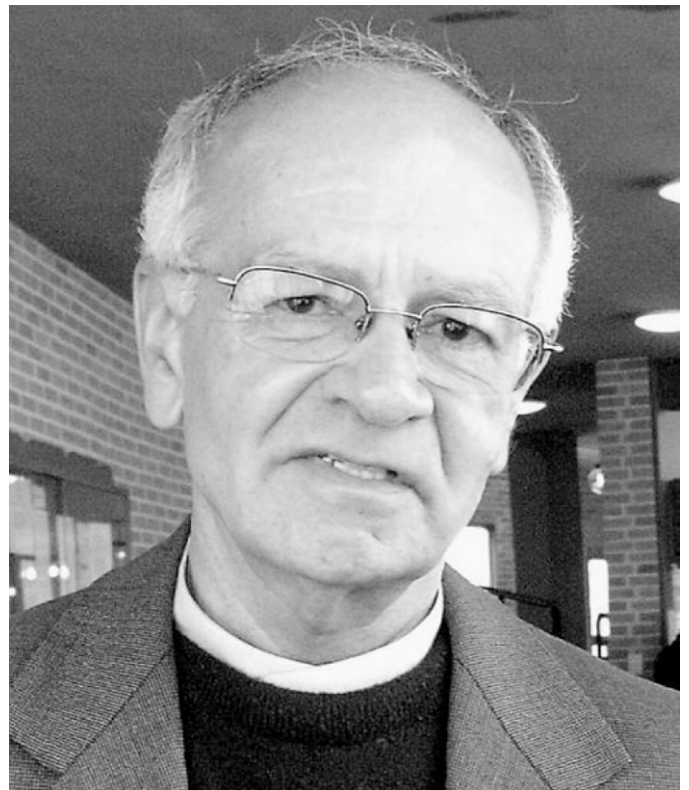
**Javier Giraldo:** Con muchas expectativas y muchos temores. Sobre todo aquellos sectores sociales que han sido más victimizados por este conflicto, tienen grandes esperanzas en que el proceso logre su objetivo. En los últimos treinta años ha habido muchos amagos de proceso de paz, y todos han fracasado.

**L.M:** ¿Qué balance hace del primer encuentro en Oslo entre la guerrilla y el gobierno colombiano, y del modelo de proceso de paz con reformas sociales?

**J.G:** La ciudadanía más comprometida, los movimientos sociales y las mismas víctimas hacen una lectura esperanzada, porque por primera vez se plantean, de manera tan clara, las raíces del conflicto. El discurso de las FARC fue radical, planteaba los problemas muy descarnadamente. Es preocupante la discrepancia tan profunda que parece haber entre los puntos de partida de las FARC y del gobierno, pero nos alegra que esas discrepancias se puedan exponer y dialogar.

**L.M:** ¿Una de esos disensos es el provocado por la cuestión de las tierras?

**J.G:** Sí. De hecho, cuando anunció la apertura de las negociaciones, el gobierno se refirió a este como el problema clave de la negociación con las FARC, pues hace referencia a su origen como movimiento de resistencia contra la usurpación y el despojo de la tierra a los campesinos. Hay que recordar que procesos anteriores se han truncado por esta cuestión de la reforma agraria. Ahora, con la Ley de Tierras, la



tendencia del gobierno y de los empresarios es reemplazar la barbarie por el mercado. En Oslo Iván Márquez criticó duramente la Ley de Tierras, concretamente la titularidad de las tierras que están siendo devueltas.

Iván Márquez hizo un discurso muy duro sobre esta ley, sobre todo, en lo concerniente a la titularidad. Cuando la Corte Suprema devuelve la titularidad de las tierras a los dueños, los empresarios les ofrecen alianzas comerciales o se ofrecen como compradores de las mismas. De esta manera, logran quedarse como propietarios los empresarios. Los campesinos, se quedan solos ante esas presiones. Lo que consigue la

Ley de Tierras es legalizar esta situación. De ahí que Iván Márquez planteara que la titulación individual no es la solución al problema agrario porque trata de cambiar la barbarie del desplazamiento por el mercado. Abrir esa pera al mercado. Este objetivo lo comenzó Álvaro Uribe cuando en su mandato demostró el desconocimiento de las propiedades colectivas como los resguardos indígenas, los consejos comunitarios de las comunidades negras. Actuó sin conocer lo que estaba previsto en la Reforma Agraria del año 96 como la posibilidad de crear un sistema de propiedad colectiva como las zonas de reserva campesina. Es más, las pocas que había, las criminalizó y les acusó de pertenecer a la guerrilla y encarceló a varios de sus líderes, y Santos es continuador de la política de Uribe.

**L.M:** Según el portavoz del gobierno en esta mesa de diálogo, Humberto de la Calle, el modelo económico no es objeto de negociación.

**J.G:** Sí, pero hay puntos en la agenda que ambas partes acordaron que implican discutir y gestionar el modelo económico. Por ejemplo, en uno de ellos se habla del acceso a la tierra con un criterio de territorialidad, es decir, con el concepto de territorio como integridad en donde se contempla la existencia de los ríos y de los bosques. De esta manera el metro cuadrado no es una mercancía rentable sin tener en cuenta la tierra y el ecosistema que lo rodea, y eso implica revisar el modelo vigente de economía agraria.

**L.M:** La participación política de las FARC después de su hipotética desmovilización militar es una cuestión crucial ¿Cómo se hace el tránsito desde una lucha armada hacia una lucha política institucional?

La participación política de las FARC y el cese del conflicto enfrenta problemas muy graves. Implica, necesariamente, la desaparición del paramilitarismo, y eso es muy complicado porque en Colombia no hay genuina voluntad de hacerlo. El paramilitarismo tiene un poder económico y militar enorme en el país. Domina regiones enteras, goza de privilegios e impunidad, en parte gracias a la Ley de Justicia y Paz impulsada por el ex-presidente Uribe. Además, el fantasma del genocidio de la Unión Patriótica sigue pesando mucho. Todo el mundo lo reconoce teóricamente. Es más, cuando Pastrana ganó las



elecciones y para posicionarse como presidente vino a España, le entrevistaron para preguntarle esto mismo, y él respondió que ojalá que eso fuera posible, pero ese camino, ya se cerró porque ya se ensayó en la época de Betancourt con la Unión Patriótica y que hacerle esa propuesta a las FARC, era como proponerle que se suicidara.

**L.M:** Pero las FARC no descartan formar partido político.

**J.G:** Parece que sí, pero ellos saben que necesitan muchas garantías y que no las tienen con en el gobierno y el contexto actual es difícil.

**L.M:** Durante este proceso de paz hay algunas cuestiones que han generado cierta inseguridad en la sociedad colombiana. Uno de ellas es que el presidente Santos no ha respondido con un alto al fuego contra la guerrilla, ¿A qué cree que se debe esta decisión?

**J.G:** Creo que es una concesión a los militares y a sectores muy reaccionarios de la sociedad. Lo hace para tranquilizar a la fuerza pública. Durante el proceso del Caguán, estos mismos fueron los que criticaron el despeje militar por parte del presidente Pastrana. Pero esta situación mina la credibilidad. Es una lógica muy extraña. De hecho, Álvaro Leyva, amigo y compañero de Juan Manuel Santos, además de ser otro de los negociadores y mediadores en otros procesos, dice que no entiende la posición de Santos y

que es sabido que ya estaba en conversaciones con Alfonso Cano cuando le mandó matar.

**L.M:** Otro de los temas es que las FARC reconozcan las víctimas y que liberen a los secuestrados.

**J.G:** En primer lugar hay que recordar que la Ley de Tierras que impulsó Santos no reconoce a las víctimas de Estado y de los puntos que dieron lugar a esta agenda para el proceso, solo hay una línea que habla de cómo resarcir a las víctimas. La guerrilla ya dijo en Oslo que sus víctimas habían sido en actos de combate. A su vez, el gobierno comentó que no ha cometido crímenes de guerra. Ambas partes dejan claro que no han infringido el Derecho Internacional Humanitario, pero desde el banco de datos del CINEP puedo decir que las víctimas que han muerto en enfrentamiento armado son el 20 por ciento frente a las muertes relacionadas con todo el conflicto que son el 80 por ciento.

El tema de los secuestros gira en torno a una gran campaña mediática. De hecho, hubo un grupo de parlamentarios que se reunió con Santos para presionar a la guerrilla pero el propio presidente les aseguró que los secuestrados no son de las FARC.

**L.M:** ¿Qué espera de los diálogos que han comenzado en La Habana?

**J.G:** Hay un punto central que es la demanda de participación de los movimientos sociales y populares en el proceso. Las FARC están de acuerdo, pero el gobierno sólo quiere que la sociedad civil presente sus propuestas on line e incluirlas en una base de datos. Hay quien opina que esta cuestión podría terminar abortando las negociaciones.

**L.M:** Los puntos se cierran con la implementación y la verificación de los acuerdos, ¿qué significado tiene para cada uno de los actores?

**J.G:** Ahí se están hablando dos lenguajes: el lenguaje del acuerdo es el del compromiso, y cuando el gobierno firma esto, está pensando en la implicación internacional desde sus intereses inversionistas. Pero los movimientos sociales están pensando mucho más en una presión sobre el gobierno para que los acuerdos de la transformación del modelo económico puedan ser verificados internacionalmente para garantizar que no se violen los derechos humanos.

**L.M:** ¿A este proceso de paz en Colombia le puede ayudar el espejo de los procesos que ya se vivieron en Centroamérica, concretamente en Guatemala y en El Salvador?

**J.G:** Ambos procesos se firmaron fuera del país y esa paz fue producto de las reuniones entre las élites, dejando a la sociedad fuera de las negociaciones. En estos países, aunque la guerrilla se desmovilizó, los crímenes continúan, pero por parte de bandas criminales despolitizadas: el problema continúa, no hubo una agenda social dentro del país.

La ONU realizó una misión verificadora en El Salvador y no funcionó porque sus presidentes no cumplieron lo acordado al finalizar el proceso de paz. Un compañero del Instituto de Derechos Humanos de ese país me dio la respuestas: esas negociaciones se hicieron desde arriba y para fuera, en vez de hacerlas desde abajo y para dentro: eso no debe ocurrir en Colombia.

De ahí la necesidad de la participación de los movimientos sociales y populares colombianos en este proceso de paz

El conflicto armado en Colombia está muy enraizado en el conflicto social y afecta a las grandes mayorías del país. Las estadísticas lo muestran claramente: más del 80% son víctimas civiles. Debido a este hecho, hay movimientos que recogen mucho de cada una de ellas, por ejemplo la Minga Indígena, los campesinos a través de la Mesa Unitaria Agraria, las comunidades negras, el Congreso de los Pueblos, etc.

**L.M:** Pero usted ¿cómo conformaría ese espacio de diálogo?

**J.G:** La sociedad civil tiene que participar en directo, en audiencias, como lo que ya se hizo en el proceso del Caguán. Por descontado que tendría que estar la guerrilla y el gobierno. En este proceso que se acaba de iniciar, hay muchos movimientos convergentes que se están preparando para participar con sus propuestas. Sería una gran frustración si se cierra ese espacio de participación.

**L.M:** Hemos hablado del futuro de las FARC, pero ¿cómo le puede perjudicar a Juan Manuel Santos que el proceso fracase?



**J.G:** Sea cual fuera el resultado del proceso, va a ser provechoso para su reelección como presidente. Si fracasa actuará como Pastrana, iniciará en los grandes medios de comunicación una campaña de desprestigio contra las FARC argumentando que no han cedido en sus posiciones.

**L.M:** Hace unos días, el ELN ya presentó a sus delegados para el inicio de los diálogos con el gobierno, ¿Cree que van a negociar sobre los mismos puntos?

**J.G:** No creo que sean los mismos porque van a ser en tiempos diferentes. Lo que sí creo es que ambos procesos se van a integrar.

**L.M:** El pasado 27 de noviembre se ratificó en Europa el Tratado de Libre Comercio con Colombia, ¿Cree que esta firma ha acelerado el proceso de paz en su país?

**J.G:** Sí, claro. La inversión extranjera necesita paz. Aunque el presidente Santos haya propuesto un proceso con reformas sociales, en su discurso prima el pragmatismo. Estos tratados de libre comercio

apoyan lo que Santos ha llamado Locomotora Minera (por la cantidad de transnacionales que están extrayendo oro, carbón, etc., en el país) y que vienen desarrollándose desde el gobierno anterior, hacen que Colombia sea un país medio- alto en inversiones. Tratados como este pueden traer grandes inversiones a Colombia, pero muestran muy poco interés en la cuestión social, olvidando cuantos están fuera del modelo económico, como los millones de campesinos desplazados por el despojo de tierras.

**L.M:** ¿Considera necesario que la Unión Europea estuviera de acompañante o garante?

**J.G:** Aunque ya están contemplados dos países garantes, Noruega, y Cuba, y Venezuela y Chile como acompañantes, existe la posibilidad de ampliar la participación de más países y sería muy positivo.

Es muy importante por varios aspectos y es que estos países que han tenido tanta participación en Colombia, deberían escuchar lo que vive el país para que tomaran en cuenta los efectos de sus políticas.

